



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA

Que en la Sesión 28/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 27 de junio de 2006, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el que se aprueba la:

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ENTIDAD RETEVISIÓN MÓVIL, S.A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 30 DE MARZO DE 2006, SOBRE LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTES DE AQUÉLLA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2004 (AEM 2006/85).

En relación con el recurso potestativo de reposición interpuesto por la entidad Retevisión Móvil, S.A. (en adelante, AMENA) contra la Resolución de la Comisión, de fecha 30 de marzo de 2006, sobre la verificación del Sistema de Contabilidad de Costes de aquélla, correspondientes al ejercicio 2004 (AEM 2006/85), el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha adoptado, en su sesión núm. 28/06 del día de la fecha, la siguiente Resolución:

Resolución de 27 de julio de 2006, recaída en el expediente AJ 2006/604.

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 30 de marzo de 2006, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobó la Resolución sobre la verificación del Sistema de Contabilidad de Costes de la entidad AMENA, correspondientes al ejercicio 2004 (AEM 2006/85).

Concretamente, a través del Resuelve de la citada Resolución se acordó lo siguiente:

***“Primero.-** Declarar que la aplicación para el ejercicio 2004 del Sistema de Contabilidad de Costes utilizado por Retevisión Móvil, S.A. en general es conforme a los Principios, Criterios y Condiciones establecidos por la Resolución de esta Comisión de fecha 15 de julio de 1999, excepto en lo que se refiere a los puntos reseñados en los apartados IV y V de la presente Resolución.*

***Segundo.-** Requerir a Retevisión Móvil, S.A. que introduzca en su Sistema de Contabilidad de Costes, para aplicaciones sucesivas, las **modificaciones** a que se refieren los apartados IV y V de la presente Resolución.*



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Tercero.- *Declarar confidenciales el Cuadro “Cuenta de Márgenes presentados por AMENA. Costes Históricos” y las cifras numéricas y porcentuales recogidos en el Apartado III, las Valoraciones porcentuales y numéricas recogidas en los Apartados IV.2.2, IV.2.3, V.2.4 y VI.1 de la presente Resolución”.*

SEGUNDO.- Mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2006, con entrada en el Registro de esta Comisión ese día 10 del mismo mes y año, el representante de AMENA, interponía recurso potestativo de reposición contra la Resolución de fecha 30 de marzo de 2006 mencionada anteriormente, con fundamento en las siguientes alegaciones:

1ª) Vulneración del artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), por falta de motivación de la asignación de costes UMTS a NAAP.

2ª) Infracción de los principios de fomento de la competencia y de neutralidad tecnológica contemplados en el artículo 3 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel), por la decisión adoptada en relación con la asignación de costes UMTS.

3ª) Vulneración del principio de fomento de la competencia establecido en el artículo 3 de la LGTel, por la decisión adoptada en relación con la imputación de los centros de actividad soporte -CAADS Relaciones Institucionales- a centros de actividad soportados.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PROCEDIMENTALES.

PRIMERO.- Calificación del escrito.

El artículo 107.1 de la LRJPAC establece que contra las resoluciones (entre otros actos) podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley.

A su vez, el artículo 116.1 de la LRJPAC establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La recurrente califica expresamente su escrito como recurso potestativo de reposición, por lo que teniendo en cuenta lo anterior y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.17 de LGTel, las Resoluciones de esta Comisión ponen fin a la vía administrativa procede, a tenor de lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, calificar el escrito presentado por AMENA como recurso potestativo de reposición que se interpone contra la Resolución de esta Comisión de fecha 30 de marzo de 2006, sobre la verificación del Sistema de Contabilidad de Costes de aquella.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

SEGUNDO.- Legitimación de la entidad recurrente.

El artículo 107 de la LRJPAC requiere la condición de interesado para estar legitimado en la interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición. La entidad recurrente ostenta la condición de interesado por cuanto que ya lo era en el procedimiento que dio como resultado la Resolución objeto de impugnación.

En atención a lo anterior se reconoce legitimación activa a AMENA para la presentación del recurso potestativo de reposición interpuesto.

TERCERO.- Competencia para resolver.

La competencia para resolver el presente recurso corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por ser el órgano administrativo que dictó el acto impugnado.

CUARTO.- Admisión a trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la LRJPAC, los recursos de reposición que interpongan los interesados habrán de fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.

El escrito presentado por AMENA, además de cumplir los requisitos del artículo 107.1, cumple igualmente con los requisitos de forma establecidos en el artículo 110.1 de la LRJPAC y ha sido presentado en el plazo previsto en el artículo 117.1 de la misma Ley, por lo que debe admitirse a trámite.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS MATERIALES.

Primero.- Sobre la falta de motivación de la decisión relativa a la asignación de costes UMTS a NAAP.

Manifiesta la entidad recurrente que con la introducción del "Paquete Telecom", en la definición del mercado de terminación móvil recogido en la Resolución de 23 de febrero de 2006, la Comisión determinó que *"de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica, los servicios de terminación prestados por cada operador móvil a través de redes de distintas tecnologías constituyen un mismo mercado de referencia"*. Sin embargo, en la Resolución de 30 de marzo de 2006 impugnada, la Comisión decidió que no resultaba posible asignar los costes de red UMTS a los diferentes servicios, lo que, a juicio de la operadora, resulta contrario a lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 2006, que consideraba incluidos dentro de un mismo mercado de referencia los servicios de terminación prestados por cada operador móvil a través de redes de distintas tecnologías.

Asimismo, señala que, contrariamente a lo recogido en el informe de auditoria de Ernst & Young (en adelante E&Y), a quien la Comisión adjudicó la auditoria externa de la contabilidad de costes en el ejercicio 2004, en la Resolución objeto del presente



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

procedimiento la Comisión estableció que la imputación de los costes UMTS se deberían imputar como costes no asignables a los servicios.

Sobre el aspecto mencionado en el párrafo anterior, AMENA considera que esta medida podría tener fundamento para el ejercicio 2004, en que los servicios UMTS se prestaron con carácter más de pruebas que comercial, pero que tal no es el caso para el ejercicio 2005, en el que los servicios UMTS eran plenamente comerciales.

En base a lo anterior, AMENA concluye que la actuación de la Comisión carece de fundamento en la conclusión alcanzada y que la no asignación a servicios de los costes UMTS impide además que la Comisión pueda verificar el efecto de los costes unitarios de los diversos servicios.

Sin embargo, frente a lo expuesto por la recurrente, debe señalarse que en la Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por AMENA, del ejercicio 2004 ahora impugnada, la Comisión resolvió imputar los costes de UMTS al Centro de Actividad UMTS y posteriormente a NAAP para el ejercicio 2005, atendiendo al principio de neutralidad tecnológica y dado el carácter emergente de los servicios prestados bajo esta tecnología, habiendo motivado suficientemente la decisión adoptada.

Es adecuado considerar que el servicio de voz existente en GSM es igualmente ofrecido en UMTS. Por tanto, es cierta la afirmación de que los servicios de terminación de llamadas vocales pueden prestarse a través de cada una de las redes móviles desplegadas por el operador (GSM y UMTS), constituyendo un mismo mercado de referencia, más aún teniendo en cuenta que desde el punto de vista del operador que origina la llamada el tipo de tecnología utilizada para terminar dicha llamada es irrelevante, puesto que el servicio percibido es el mismo con independencia de la red utilizada. De hecho, una gran parte de los elementos de conmutación de red, tales como las centrales de conmutación, HLR, PTS... son comunes entre ambas tecnologías, así como los Puntos de Interconexión.

Debe reiterarse, en este sentido, la afirmación contenida en la Resolución citada de 23 de febrero de 2006, según la cual *"...el servicio de terminación de llamadas vocales puede prestarse a través de cada una de las redes móviles desplegadas por el operador. Sin embargo, la percepción del servicio de terminación por parte del operador en cuya red se origina la llamada no varía en función de la tecnología utilizada, dado que dicho operador desconoce en que tipo de red se encuentra el destinatario de la llamada. Así, y de acuerdo con el principio de neutralidad tecnológica, los servicios de terminación prestados por cada operador móvil a través de redes de distintas tecnologías constituyen un mismo mercado de referencia"*.

No obstante lo anterior, la asignación de los costes de la red UMTS a los diferentes servicios no puede tener lugar actualmente, si se tienen en cuenta los aspectos técnicos que se mencionan a continuación:

- Número de clientes con terminal 3G: aunque los abonados pueden utilizar la misma tarjeta SIM para ambas tecnologías, los servicios UMTS únicamente



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

pueden ofrecerse si el cliente dispone de un terminal compatible UMTS (también llamado 3G).

- Cobertura UMTS: para poder emitir y recibir llamadas sobre la red UMTS es necesario disponer de cobertura suficiente, es decir, se deben dar las condiciones de existencia de un despliegue de radio UMTS suficiente para ofrecer servicio por medio de dicha tecnología, ya que de lo contrario, si la calidad de la señal UMTS es demasiado débil, los terminales 3G cambian automáticamente de red y pasan a cobertura GSM, impidiéndose así la emisión o recepción de llamadas sobre red UMTS (dichas llamadas se realizarían sobre la red GSM).
- Selección de red: aunque el abonado disponga de un terminal 3G y de suficiente cobertura radio, los terminales permiten al usuario seleccionar la red que desea utilizar de preferencia.

Las consideraciones realizadas anteriormente implican que, con la información proporcionada por el operador, sobre el que recae la carga de la prueba, a través de la tabla de factores de enrutamiento así como con los estudios técnicos aportados no sea posible, en el momento actual, identificar y asignar los costes de la red UMTS que se deben imputar al servicio de terminación de voz y en consecuencia, y teniendo en cuenta a su vez el número de clientes y el volumen de tráfico cursado a través de la mencionada tecnología, estimó conveniente imputar los costes de UMTS al centro de actividad UMTS y posteriormente a NAAP.

Por otra parte, y abundando en lo anterior, según los datos de uso de la numeración asignada a AMENA por la Comisión y facilitados por aquella, en el año 2004 el número de clientes UMTS ni siquiera aparecía, lo cual es coherente con la postura de AMENA al respecto, que admite la no inclusión de los costes UMTS en el ejercicio 2004 debido a su uso más orientado a pruebas que a utilización comercial.

Por el contrario, los mismos datos de numeración actualizados por AMENA para el año 2005, muestran un volumen total de **[CONFIDENCIAL]** clientes UMTS, lo que representa un **[CONFIDENCIAL]** sobre el total de clientes de AMENA. Este porcentaje de usuarios UMTS es aún muy bajo, muestra evidente de la situación actual en el mercado. Por el momento, todos los operadores móviles tienen un índice muy bajo de usuarios 3G, motivado en parte por la todavía reducida oferta de terminales UMTS. Prueba de ello es que AMENA promociona únicamente 5 terminales UMTS en su página web frente a los más de 80 terminales multimedia disponibles.

Si a este **[CONFIDENCIAL]** de usuarios con terminales 3G le añadimos el hecho de que, según fuentes publicadas por la propia AMENA en su página web, durante el último trimestre del 2005 la cobertura UMTS alcanzaba el 45% de la población española (155 municipios), lejos aún del objetivo de cobertura total de la población y, que en ciertos casos, los usuarios con terminales 3G pueden seleccionar manualmente la red GSM para evitar los problemas que se producen por falta de cobertura (típicamente, la disminución en la calidad radio 3G provoca que las llamadas necesiten de “handovers” entre ambas redes, pudiéndose en ocasiones producir cortes en la comunicación), la acumulación de estos factores implica que un porcentaje de las llamadas de voz



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

efectuadas o recibidas por dichos clientes 3G estarían realmente siendo provistas mediante la red GSM.

La existencia de los factores anteriores pone de manifiesto el carácter no significativo del volumen de tráfico realmente cursado mediante la red UMTS de AMENA tanto para el ejercicio 2004 como para el 2005. En todo caso, estamos ante una incidencia muy poco significativa de los servicios de voz en la utilización de la red UMTS.

Por todo ello, observándose que el número de clientes de AMENA y el porcentaje de llamadas realizadas bajo la citada tecnología incluso en las condiciones de cobertura del 2005 son todavía muy bajos, la Comisión estimó conveniente en la Resolución objeto del presente recurso, imputar los costes de UMTS al Centro de Actividad UMTS y posteriormente a NAAP.

En cualquier caso, no procede dar acogida a la alegación de AMENA relativa a la falta de motivación de la Resolución impugnada, procediendo en este punto traer a colación la reiterada interpretación jurisprudencial en relación con la motivación de los actos administrativos, con arreglo a la cual la exigencia contenida en el artículo 54.1 de la LRJPAC se traduce en la obligación de exteriorizar las razones que sirven de fundamento a la decisión administrativa, realizando una sucinta referencia a los hechos y fundamentos de Derecho que dan lugar a la adopción de la decisión, en aras de permitir a los afectados ejercitar debidamente su derecho de defensa, pero sin que se requiera una profunda, extensa y detallada exposición de los razonamientos o argumentos determinantes de su adopción.

El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), en Sentencia de fecha 29 de marzo de 2004 (RJ 2004/1849), señalaba lo siguiente:

“El deber de motivación de los actos administrativos tiene por finalidad, según se refiere en la sentencia de esta Sala de 10 de diciembre de 2003 (RC 3905/2000 [RJ 2003\9526]), que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto”.

Asimismo, en Sentencia de fecha 19 de febrero de 2002 (RJ 2002/2957) establecía que:

“...tampoco se vulnera el artículo 54 de la Ley 30/1992 en la última modificación operada por la Ley 4/1999 respecto de la exigencia de motivación aludida por la parte recurrente como causa de nulidad del acto administrativo impugnado, puesto que como ya indicara reiterada jurisprudencia de esta Sala, de la que son exponente, entre otras, las sentencias de 20 de enero de 1998 (RJ 1998\1418) y la posterior de 25 de mayo de 1998 (RJ 1998\4486), en el Acuerdo impugnado se da cumplida respuesta y se da a conocer a la destinataria las razones de la decisión, permitiendo frente a ella la interposición de los recursos procedentes”.

Del mismo modo, en la Sentencia de fecha 29 de febrero de 2000 (Ar. 2000/3166):



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

“...debemos considerar que la exigencia legal de motivación no puede identificarse con la idea de que aquélla sea jurídicamente correcta en cuanto al fondo, sino que se trata de un requisito formal, que obliga a exteriorizar las razones en que se basa el órgano decisor para resolver en un sentido determinado, con la finalidad de que quienes se consideren afectados en sus intereses legítimos por la resolución administrativa puedan hacer valer, frente a aquellas razones, los argumentos que entiendan insuficientes para justificar el acto y que por eso debe ser anulado.”

La Sentencia de fecha 9 de febrero de 1996 (RJ 1996/1105) se pronunciaba en el sentido expuesto, señalando:

“En la alegada falta de motivación de las resoluciones administrativas subyace una confusión entre el acogimiento de las propias alegaciones y el requisito de los actos administrativos de hacer explícitas las razones que fundamentan la decisión adoptada, como establecía el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258, 1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708) (actual art. 54 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993\246]). Exigencia que se cumple cuando se dan a conocer dichas razones, permitiendo tanto el ejercicio del derecho de defensa como el eventual control en vía administrativa y jurisdiccional”.

Por último, en Sentencia de fecha 12 de diciembre de 1990 (Ar. 1990/9918) se establecía lo siguiente:

“la brevedad de los términos y la concisión expresiva de un acto administrativo, no puede confundirse con su falta de motivación”.

Dicho todo lo anterior, cabe concluir que la Resolución recurrida fue motivada suficientemente por esta Comisión, que expuso y desarrolló correctamente, con la debida separación entre hechos y fundamentos de Derecho, las circunstancias que justificaban la conveniencia de asignar los costes UMTS a NAAP, al menos transitoriamente. Muestra de la existencia de motivación es, además, el propio recurso de reposición interpuesto por AMENA, en el que se discute ampliamente sobre los planteamientos de la Resolución impugnada.

En lo que se refiere a la aludida separación del pronunciamiento formulado en la Resolución de 23 de febrero de 2006, procede señalar que no resulta en ningún caso óbice de lo establecido en la Resolución impugnada lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 2006 sobre la consideración de que los servicios de terminación prestados por cada operador móvil a través de redes de distintas tecnologías constituyen un mismo mercado de referencia, ya que, sin perjuicio de que en un futuro sea posible la asignación de los costes UMTS a los servicios, en estos momentos, de acuerdo con los razonamientos detalladamente expuestos sobre el grado de desarrollo de los servicios prestados bajo la tecnología UMTS, resulta procedente la asignación de los costes UMTS a NAAP.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En cualquier caso, debe recordarse que es reiterada la doctrina jurisprudencial según la cual el precedente administrativo no vincula ni a la Administración ni a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fechas 20 de abril de 2004 -RJ 2524-, 17 de diciembre de 2003 -RJ 8669-, 6 de noviembre de 2003 -RJ 8033-, 4 de diciembre de 2002 -RJ 10832-, 21 de febrero de 2001 -RJ 1627-, 17 de mayo de 1996 -AJ 4159- y 13 de julio de 1991 -RJ 6775-). Además, la LRJPAC permite implícitamente la separación de dicho precedente al establecer, en el artículo 54, que habrán de motivarse aquéllos actos administrativos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, por lo que acreditada la motivación de la Resolución impugnada, se desvanece el argumento de la vulneración de la doctrina del precedente administrativo.

Segundo.- Sobre la vulneración de los principios de fomento de la competencia y neutralidad tecnológica por la decisión relativa a la asignación de los costes UMTS.

AMENA señala que, conforme con la definición del mercado relevante efectuada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones llevada a cabo en la Resolución de 23 de febrero de 2006, la aplicación del principio de neutralidad tecnológica lleva precisamente a una conclusión contraria a dicho principio, pues en dicha Resolución se persigue la aplicación de un principio regulador similar cualquiera que sea la tecnología, y, en este caso, es la orientación de precios a costes, tanto para GSM como para UMTS, lo que resulta coherente con el establecimiento de un precio único para ambas modalidades, siempre y cuando se cubran los costes de producción de los servicios de interconexión con ambas tecnologías.

Asimismo, AMENA alega que la Resolución impugnada tampoco es coherente con el principio de fomento de la competencia y de promoción de una inversión eficiente en materia de infraestructuras contemplado en la LGTel, puesto que no considera los costes UMTS en la valoración de los costes de producción de los servicios de interconexión.

Por último, AMENA entiende que la tecnología UMTS en un futuro dará lugar a una mayor eficiencia en la producción de los servicios de voz debido a la mayor eficiencia espectral conseguida a través de la citada tecnología.

Sin embargo, en relación con tales argumentos de AMENA, y como ya se ha puesto de manifiesto, el volumen de tráfico de terminación en red 3G se encuentra todavía en una fase inicial de desarrollo, habiendo tenido lugar el inicio del despliegue de dichas redes durante el año 2004.

En este sentido, hay que considerar que el concepto de eficiencia es un concepto que lleva asociado un carácter dinámico y que solamente en la medida en que el número de comunicaciones y minutos cursados mediante la citada tecnología se vaya incrementando se podrá conseguir una mayor eficiencia y desarrollo de la misma.

Por otro lado, debe señalarse, como ya se expuso en la citada Resolución de 23 de febrero de 2006, sobre la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales, que los servicios de terminación



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

prestados por cada operador móvil a través de redes de distintas tecnologías constituyen un mismo mercado de referencia, lo que, responde como la propia Resolución señala, al principio de neutralidad tecnológica.

Pero ello no implica que la Comisión deba aceptar que la necesidad en estos momentos de separar los costes por inversiones en UMTS del resto de costes por las razones ya expuestas suponga un incumplimiento de la premisa comunitaria de fomento de la inversión tecnológica y la innovación.

Y es que la intención de que se recojan los costes por inversiones en la nueva red dentro de un Centro de Actividad específico y su posterior distribución a NAAP es evitar cualquier tipo de desviación provocado por el uso incipiente de dicha tecnología.

En cualquier caso, como ya se ha expuesto, esta es una situación transitoria debido al momento inicial de despliegue de la red. Por ello, es necesario conocer la evolución de los minutos de tráfico durante 2005 para evitar cualquier tipo de distorsión en los costes que no permita dar una visión fiel del coste medio del servicio de terminación de llamadas de voz, motivo por el cual los costes por inversiones en UMTS deberán agruparse en el Centro de Actividad UMTS y trasladarlo posteriormente a NAAP.

Tercero.- Sobre la infracción del principio de fomento de la competencia por la decisión relativa a la imputación de los centros de actividad soporte – CAADS Relaciones Institucionales – a centros de actividad soportados.

Se alega que la imputación de los costes en base a actividades de soporte, entre los que se encuentra el área de Relaciones Institucionales (en adelante, RELIN), indicada por la Comisión en su Resolución del expediente AEM 2006/85, supondría imputar en exceso a servicios finales en detrimento de los servicios mayoristas, que son el objeto principal del área RELIN, pues incorpora todo el personal vinculado a la negociación de la interconexión, incluyendo la contratación y gestión de circuitos de interconexión, y el personal dedicado a la regulación, siendo la regulación mayorista, en concreto de los precios de interconexión, la que acarrea los mayores recursos de esta área.

En relación con ello, si bien las alegaciones que en su día realizó AMENA en el citado expediente sobre la imputación de costes de los centros de actividad soporte, hicieron referencia a que, en opinión de la operadora, los sub-repartos introducían complejidad al sistema y restaban transparencia al mismo, ahora AMENA alega que el criterio de distribución recogido en la Resolución objeto de recurso, supondría imputar costes en exceso a servicios finales en detrimento de los servicios mayoristas.

En referencia a esta mayor imputación a los servicios mayoristas o minoristas cabe destacar, que el criterio establecido por la Comisión en la Resolución sobre la contabilidad de costes de AMENA correspondiente al ejercicio 2004, en ningún caso se puede ni se debe fundamentar en un análisis cuantitativo del impacto sobre los servicios de cliente final o sobre los servicios mayoristas, sino, que tal y como recogen los principios, criterios y condiciones en los que se debe basar el modelo contable de cualquier operadora, dicho reparto debe cumplir, entre otros, el Principio de Causalidad, por el cual, todas las imputaciones de costes e ingresos a cada actividad o servicio



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

deberán realizarse a través de los inductores/conductores de dichos costes e ingresos, es decir, a través de los parámetros objetivos de las variables que los generan y sobre los que se distribuyen dichos costes.

Por tanto, es en la aplicación del citado principio donde esta Comisión se fundamenta para estimar que los *“Costes en base a actividades de soporte”* (que se asignan entre otros al CAADS Relaciones Institucionales), se deben redistribuir entre el resto de costes en base a actividades en función de un criterio objetivo y causal (por ejemplo, en función del número de personas asignadas a cada actividad), es decir, atendiendo al verdadero inductor de coste permitiendo, de esta forma, a la Comisión conocer cuál es el coste real de prestación del servicio.

En atención a ello, la Operadora deberá proponer un criterio de reparto que permita conocer en función de algún inductor objetivo y causal cómo contribuyen dichos costes de soporte a los distintos servicios, con independencia de que se vean afectados por tales repartos más unos servicios u otros, ya que tal afectación dependerá de la contribución de tales costes a la producción del servicio y si, tal y como indica AMENA, el área RELIN incorpora gran cantidad de personal vinculado a la negociación de la interconexión, el criterio de reparto causal que deberá proponer tendrá que recoger dicha circunstancia para, de esta manera, determinar un coste de producción ajustado a la realidad y contribuir así con los objetivos de la regulación recogidos en el artículo 3 de la GTel.

En atención a todo lo anterior, y vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión

RESUELVE

Primero.- Estimar parcialmente el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de la Comisión, de fecha 30 de marzo de 2006, sobre la verificación del Sistema de Contabilidad de Costes de la entidad Retevisión Móvil, S.A. correspondientes al ejercicio 2004 (AEM 2006/85), de acuerdo con lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Tercero de la presente, y en relación con el apartado IV.2.2. de la Resolución de fecha 30 de marzo de 2006, denominado “Modificaciones requeridas por la CMT que no se han implementado o cuya implementación está cuestionada por E&Y”, en el punto decimosexto relativo a la imputación de centros de actividad de soporte a servicios, en los siguientes términos:

Retevisión Móvil, S.A. deberá proponer un criterio de reparto que permita conocer en función de algún inductor objetivo y causal cómo contribuye el coste en base a actividades de soporte (RELIN) a los distintos servicios, de modo que si este área incorpora gran cantidad de personal vinculado a la negociación de la interconexión, el criterio de reparto causal tendrá que recoger dicha circunstancia específica del mencionado coste en base a actividades, a efectos de determinar un coste de producción ajustado a la realidad.

Segundo.- Desestimar en todo lo demás el recurso potestativo de reposición interpuesto por Retevisión Móvil, S.A.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolución a la que se refiere el presente certificado puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Reinaldo Rodríguez Illera

Jaime Almenar Belenguer